

## **Honduras (Nivel 2)**

El Gobierno de Honduras no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos considerables con tal fin. El gobierno mostró que, en general, ha realizado mayores esfuerzos que durante el periodo de análisis anterior, considerando el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 sobre su capacidad para combatir la trata. Por lo tanto, Honduras permaneció en el Nivel 2. Entre estos esfuerzos se incluye la identificación de más víctimas de trata con fines de trabajo forzoso (trata laboral), que incluye a menores que han sido forzados a cometer actos ilícitos, y un aumento en el financiamiento de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT). Durante la pandemia, la CICESCT siguió ofreciendo protección inmediata a las víctimas y coordinando servicios adicionales entre otras partes interesadas. El gobierno adaptó sus actividades de capacitación y sensibilización para abordar, por medio de plataformas virtuales, a los grupos en alto riesgo de trata y a los posibles primeros socorristas. De esta manera se logró alcanzar a partes interesadas en un rango geográfico más amplio. El gobierno también promulgó una nueva disposición del código penal que aseguró que la definición de trata estuviera acorde con la definición según el derecho internacional. Pese a esto, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varios ámbitos clave. Las nuevas enmiendas al código penal redujeron las penas por delitos de trata, lo cual dio como resultado penas que no eran acordes con las que están prescritas para otros delitos graves, tales como la violación. El gobierno identificó a menos víctimas en general e investigó, enjuició y condenó a menos sospechosos. El gobierno no informó que hubiera penalizado a ninguna agencia de empleo por utilizar prácticas de reclutamiento fraudulentas ni por cobrarles comisiones de contratación a los empleados.

### **RECOMENDACIONES PRINCIPALES:**

Aumentar el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de los presuntos tratantes, que incluyan a los funcionarios acusados de complicidad y los delitos por trabajos forzados. • Enmendar el código penal para asegurar que las penas prescritas por delitos de trata sean acordes con las penas prescritas para otros delitos graves, tales como la violación. • Desarrollar y poner en práctica procedimientos estandarizados para la identificación y remisión de víctimas, que incluyan la detección de indicios de actividad delictiva forzada entre menores que

participan en delitos relacionados con las pandillas o maras. • Aumentar los fondos que aporta el gobierno para los servicios a las víctimas, incluso fondos para organizaciones no gubernamentales, y unidades policiales y de fiscalía contra la trata. • Redoblar los esfuerzos para identificar a las víctimas, incluso entre las poblaciones especialmente vulnerables, tales como los adultos migrantes, y prestar asistencia a todas las víctimas, incluso a las víctimas de trabajo forzoso. • Hacer cumplir las leyes que sancionan a los intermediarios por prácticas ilícitas que facilitan la trata, como ofertas de empleo fraudulentas o cargos ilícitos por cuestiones de migración o colocación de empleo. • Institucionalizar la capacitación de las unidades policiales y de fiscalía contra la trata, de los jueces, así como del equipo de respuesta inmediata (ERI) de la CICESCT.

## **ENJUICIAMIENTO**

El gobierno siguió entablando procesos judiciales. El Artículo 219 del código penal de Honduras, que entró en vigor en junio de 2020, penaliza la trata con fines de explotación sexual y laboral, a la vez que prescribe penas de cinco a ocho años de prisión para estos delitos. Estas penas fueron suficientemente estrictas. Con respecto a la trata sexual, sin embargo, estas penas no fueron acordes con las prescritas para otros delitos graves, tales como la violación.

El gobierno indicó haber investigado 82 casos de presunta trata sexual y delitos conexos en 2020, comparados con 91 casos que se investigaron en 2019 y 145 en 2018. Las autoridades iniciaron procesos penales contra nueve sospechosos (siete de ellos por trata sexual y dos por trata de trabajo forzoso), comparados con 55 que se iniciaron en 2019 (53 por trata sexual y proxenetismo y dos por trata de trabajo forzoso) así como 35 en 2018. El gobierno condenó a 14 tratantes, entre los cuales 10 fueron por trata sexual, dos por trabajo forzoso y dos tanto por trata sexual como por trabajo forzoso, comparados con 34 tratantes condenados en 2019 (33 por trata sexual o proxenetismo y uno por trata de trabajo forzoso) y 16 tratantes (entre ellos seis por proxenetismo) condenados en 2018. Los tribunales emitieron fallos condenatorios por periodos de tres a 13 años para los tratantes adultos condenados y obligaron a algunos de ellos a pagar multas al gobierno. El sistema penal juvenil emitió un fallo condenatorio de seis meses de arresto domiciliario a un menor por ser tratante. El gobierno investigó a dos agentes de policía por presuntos delitos de trata y a seis agentes de policía por delitos de tráfico ilícito de personas que podrían haber aumentado la vulnerabilidad de los migrantes a la trata. Las autoridades condenaron a dos funcionarios del gobierno, uno por cargos de

proxenetismo y otro por pagar por relaciones sexuales, debido a su participación en delitos de trata sexual en 2017. El gobierno no proporcionó información actualizada sobre su investigación de la presunta explotación sexual de una reclusa en un centro penitenciario el año anterior. La corrupción y la complicidad oficiales en los delitos de trata siguieron siendo temas de considerable inquietud, lo que inhibió las medidas de aplicación de la ley durante el año.

El gobierno mantuvo una unidad especializada de fiscalía contra la trata de personas, pero los expertos observaron que la unidad todavía no contaba con suficiente personal ni recursos para investigar e impulsar causas por delitos de trata. Las autoridades informaron que las restricciones que se implementaron para mitigar la pandemia impidieron llevar a cabo investigaciones en locales comerciales donde se sabe que ocurren casos de trata, lo cual retrasó las investigaciones y el procesamiento de los sospechosos de delitos de trata. Una ONG observó que los tribunales retrasaron los casos de trata, situación que empeoró a causa de la pandemia, a pesar de la exigencia de la ley contra la trata de iniciar una causa de manera oportuna. El Ministerio Público capacitó a 160 fiscales sobre el tema de tráfico de personas, lo cual incluyó capacitación sobre las nuevas disposiciones del código penal. La escuela de capacitación judicial del gobierno capacitó a algunos magistrados, jueces y a jueces de paz sobre temas relacionados con el tráfico de personas. Los expertos observaron que la falta de conocimiento especializado y de experiencia en el manejo de casos de trata por parte de los jueces era un impedimento al éxito del procesamiento de los sospechosos y al logro de fallos condenatorios en los casos. El gobierno cooperó con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y México para investigar casos de trata y detener a sospechosos.

## **PROTECCIÓN**

El gobierno siguió aplicando fuertes medidas de protección y el equipo de respuesta inmediata de la CICESCT brindó asistencia con solidez a las víctimas durante todo el año. El gobierno y las ONG identificaron a 42 víctimas de trata en 2020, entre ellas a 31 explotadas por trata sexual y 11 por trata de trabajo forzoso. Dos de las víctimas de trata laboral eran menores que habían sido forzados a cometer actos ilícitos. En comparación, el gobierno identificó a 75 víctimas (66 de trata sexual y 9 de trata de trabajo forzoso) y las ONG identificaron a 78 víctimas en 2019. En 2018, el gobierno identificó a 73 víctimas (63 de trata sexual y 10 de trata de trabajo forzoso). Las autoridades identificaron a cinco de las víctimas a

través de llamadas recibidas en las líneas telefónicas directas del gobierno y 16 fueron identificadas en México o Guatemala y luego repatriadas a Honduras. Los datos desglosados del gobierno sobre víctimas mostraban la existencia de víctimas de delitos conexos, tales como pornografía infantil. Todas las víctimas identificadas eran ciudadanos de Honduras, entre los cuales se encontraron a 43 menores y 24 adultos, 56 mujeres y 10 hombres y una persona LGBTQI+. Los primeros socorristas remitieron a las posibles víctimas de trata al equipo de respuesta inmediata de la CICESCT, equipo conformado por dos psicólogos y una trabajadora social, para que recibieran apoyo inmediato. Este equipo continuó sus operaciones durante la pandemia a pesar de las restricciones a la movilidad y a la falta de fondos adecuados para la compra de equipo de protección personal. El equipo de respuesta inmediata brindó asistencia a 67 víctimas de trata y delitos conexos, además de asesoría legal, protección inmediata y servicios psicológicos. De conformidad con el protocolo interinstitucional gubernamental de protección a las víctimas, la CICESCT coordinó con instituciones del gobierno y ONG pertinentes para brindar servicios adicionales a las víctimas, entre ellos asesoría de salud mental, servicios jurídicos, atención médica, alojamiento, alimentos, reintegración familiar y repatriación. La CICESCT remitió a 37 víctimas (cinco niños, 22 niñas y 10 mujeres) a los refugios del gobierno y de ONG para recibir atención adicional. Las víctimas cuyas pruebas de COVID-19 dieron un resultado positivo enfrentaron retrasos o limitaciones en la recepción de servicios por parte de los refugios. El gobierno brindó a 31 víctimas servicios de protección, entre ellos medidas de protección de identidad y refugio, así como asistencia económica, médica y psicosocial.

Los profesionales de aplicación de la ley, migración y servicios sociales contaban con procedimientos escritos para identificar y asistir a las víctimas, entre ellos cómo detectar indicios de trata entre las poblaciones vulnerables y remitir a las posibles víctimas al equipo de respuesta inmediata de la CICESCT. Tanto la CICESCT como la unidad de fiscalía contra la trata operaron líneas telefónicas directas específicas para casos de trata que siguieron funcionando durante la pandemia. El gobierno informó que 41 llamadas a la línea telefónica directa de la CICESCT llevaron a la remisión de 22 casos posibles para su investigación. Los funcionarios del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) llevaron a cabo evaluaciones de hondureños retornados y remitieron presuntos casos de trata a la CICESCT. Sin embargo, la detección de indicios de trata no se hizo de manera sistemática entre los migrantes retornados y el gobierno no notificó si dichos

esfuerzos dieron como resultado la identificación de alguna víctima durante el año. El gobierno siguió un protocolo regional para facilitar la repatriación de las víctimas identificadas en el exterior y brindó fondos para alimentos, transporte y alojamiento para dichas víctimas por medio de un fondo administrado por la Secretaría de Asuntos Exteriores por medio de la Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional. Las víctimas menores de edad recibieron atención en los refugios del gobierno o de las ONG, a la vez que las mujeres tenían la opción de recibir asistencia de los refugios de las ONG. No existían refugios especializados para las víctimas de trata ni refugios que aceptaban a hombres. El gobierno ofreció servicios tanto a víctimas de trata de trabajo forzoso como de trata sexual. Sin embargo, identificó a un número desproporcionadamente bajo de víctimas de trata de trabajo forzoso comparado con la prevalencia estimada de trabajo forzoso en el país.

El gobierno asignó inicialmente 8,93 millones de lempiras (US \$357.150) a la CICESCT, pero después redujo su desembolso real a 6,18 millones de lempiras (US \$247.020) debido a la redistribución de fondos para la pandemia y a recortes presupuestarios. Esta cantidad representó un aumento por encima de los 5,53 millones de lempiras (US \$221.400) que se proporcionaron en 2019, aunque los funcionarios informaron que carecían de recursos financieros y humanos suficientes para ofrecer cuidados integrales a las víctimas, apoyarlas en todo el país y recabar y analizar datos sobre ellas. La CICESCT otorgó 76.970 lempiras (US \$3.080) a una ONG que opera un refugio que alberga a mujeres, niñas y niños hasta la edad de 12 años y dedicó 318.040 lempiras (US \$12.720) a las necesidades inmediatas de las víctimas, tales como alimentos, artículos de higiene y alojamiento. Otros organismos del Gobierno de Honduras destinaron fondos presupuestarios para la asistencia de víctimas.

Algunas víctimas ofrecieron su testimonio a través de entrevistas grabadas con anterioridad en cámaras de Gesell seguras o, debido a la pandemia, a través de videoconferencias. La legislación de Honduras prohíbe el procesamiento de víctimas por actos ilícitos que los tratantes los obligaron a cometer. Sin embargo, el gobierno no contaba con procedimientos formales para identificar a las víctimas entre los menores detenidos por participar en actividades delictivas relacionadas con las maras. Sin embargo, las ONG informaron que las autoridades no lograron identificar adecuadamente a muchos menores obligados por grupos delictivos a participar en actividades ilícitas, por lo que puede que se les tratara como

delincuentes en vez de víctimas. La ley hondureña permite a las víctimas extranjeras recibir residencia temporal o permanente, incluida la autorización para trabajar; el gobierno no identificó a víctimas extranjeras que pudieran haber recibido esos beneficios en 2020.

## **PREVENCIÓN**

El gobierno mantuvo las labores de prevención. La CICESCT convocó a una red de 32 instancias del gobierno y ONG que coordinaban las labores del gobierno contra la trata, entre ellas la implementación del plan de acción nacional contra la trata de 2016-2020. El gobierno no asignó suficientes fondos para la implementación del plan y las entidades pertinentes tuvieron que recurrir a apoyo adicional brindado por donantes extranjeros para llevar a cabo sus actividades. La CICESCT mantuvo una página web pública y creó cuentas en redes sociales para compartir información sobre la trata de personas con el público. Las entidades del gobierno, tales como la CICESCT, sus comisiones locales, el Ministerio Público, la Secretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Educación brindaron capacitación en materia de trata a la policía, abogados, jueces, otros funcionarios del gobierno, profesionales de la industria del turismo, organizaciones de la sociedad civil, maestros y miembros del público del país en general. Debido a la pandemia, el gobierno llevó a cabo la mayoría de las capacitaciones de manera virtual, lo cual les permitió alcanzar a más partes interesadas y reducir los costos. Estas capacitaciones estaban destinadas a miembros de grupos de personas en riesgo, tales como menores y estudiantes, personas con discapacidades e indígenas, así como a posibles primeros socorristas y funcionarios de sectores claves tales como los de educación y turismo. La CICESCT informó que utilizó plataformas de internet para capacitar y educar a las partes interesadas sobre el impacto de las restricciones relacionadas con la pandemia sobre las tendencias de la trata y cómo adaptarse. Funcionarios de diversos ministerios llevaron a cabo capacitaciones adicionales y actividades de sensibilización con apoyo de ONG y organizaciones internacionales.

La Fuerza de Tarea de Apoyo al Migrante de la Primera Dama, Ana García de Hernández, continuó con la coordinación de un enfoque integral de gobierno para informar a los hondureños acerca de los peligros de la migración irregular, entre ellos los peligros de la trata, y el gobierno continuó sus campañas de sensibilización pública mediante las cuales advirtió sobre los riesgos de la trata

que surgen en las rutas migratorias que atraviesan Guatemala y México. El gobierno llevó a cabo operaciones de aplicación de la ley centradas en la migración irregular y el aumento en la aplicación de la ley fronteriza, las cuales permitieron 160 arrestos relacionados con delitos de tráfico de migrantes que incrementaban la vulnerabilidad de los migrantes a ser víctimas de la trata. Los inspectores laborales no identificaron ningún caso presunto de trata en 2020. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) estableció y dio seguimiento a normativas para el cumplimiento de las leyes y políticas que reducirían la vulnerabilidad de los trabajadores a la trata, entre las cuales se incluyen aquellas que norman a las agencias de empleo privadas y que establecen protecciones para las clases de trabajadores más vulnerables, tales como las trabajadoras domésticas, marineros y trabajadores temporales en Canadá. El gobierno, sin embargo, no brindó detalles sobre cómo se hacen cumplir dichas normativas. Las normativas hondureñas prohibían cobrarles cuotas de reclutamiento a los trabajadores, pero el gobierno no informó haber hecho cumplir esas normativas en 2020. El gobierno modernizó su sistema para la tarjeta de identidad nacional y comenzó a distribuir las nuevas tarjetas en febrero de 2021. El gobierno no tomó medidas para reducir la demanda de actos sexuales comerciales. Honduras eliminó el delito de turismo sexual de su enmienda al código penal, y el gobierno no investigó ni impulsó ninguna causa de ningún caso presunto de trata en el sector del turismo.

## **PERFIL EN MATERIA DE TRATA**

De acuerdo con los informes de los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas locales y extranjeras en Honduras y a víctimas hondureñas en el exterior. Los tratantes explotan a mujeres y menores hondureños por medio de la trata sexual dentro del país y en otros países tales como Belice, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala y México. Los tratantes se centran particularmente en migrantes hondureños LGBTQI+, desplazados internos, personas con discapacidades, menores que hacen trabajo infantil forzoso, menores cuyos padres han migrado y personas que viven en zonas controladas por grupos de delincuencia organizada. Según funcionarios, las causas que exacerban estos riesgos son los problemas familiares, el desempleo y la falta de acceso a cuidados de salud. Los tratantes explotan a sus víctimas dentro de sus propios hogares o comunidades, incluso a veces son explotadas por sus propios familiares o amigos. Los tratantes explotan a adultos y menores hondureños para que realicen trabajo forzoso vendiendo alimentos en puestos callejeros, mendicidad forzosa, servicio

doméstico, tráfico de drogas y en el sector informal en su propio país, así como trabajo forzoso en otros países, en particular en Guatemala, México y Estados Unidos. Los menores, entre ellos niños y niñas de comunidades indígenas y afrodescendientes (en particular los niños misquitos) se encuentran en riesgo de realizar trabajo forzoso en las industrias de la agricultura, construcción, manufactura, minería y hotelería. Los menores que viven en las calles están en riesgo de convertirse en víctimas de la trata sexual y laboral. Las organizaciones delictivas, entre ellas las maras, explotan a las niñas por medio de la trata sexual, fuerzan a los menores a mendigar en las calles y coaccionan y amenazan a menores y adultos jóvenes para que transporten armas, vendan drogas, cometan extorsión o sirvan de vigías. Esto ocurría principalmente en las zonas urbanas, pero una ONG informó que hubo un aumento en las actividades de las maras en las zonas rurales. Los delincuentes ampliaron el uso de plataformas de redes sociales para reclutar a sus víctimas, a menudo por medio de promesas de empleo falsas, y siguieron fijando en su objetivo a las poblaciones vulnerables. La pandemia, así como los huracanes Eta e Iota, afectaron de manera negativa las oportunidades económicas y ampliaron las desigualdades, lo cual dio como resultado un aumento en la cantidad de personas vulnerables ante la trata. Algunos de los 45 profesionales médicos cubanos que contrató el gobierno para ayudar durante la pandemia podrían haber sido forzados a trabajar por el gobierno cubano. Honduras es un país de destino para turistas de Canadá y los Estados Unidos involucrados en la explotación sexual de menores. Los migrantes provenientes de África, Asia, el Caribe, Centroamérica, Oriente Medio y Suramérica que transitan por Honduras en camino a los Estados Unidos son vulnerables a ser explotados cuando son víctimas de la trata. La corrupción generalizada ha contribuido a facilitar la comisión de delitos de trata.